

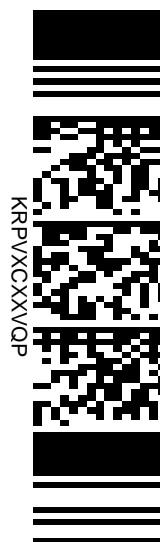
Santiago, cinco de diciembre de dos mil veintidós

I.- En cuanto al Ingreso Corte N° 12561-2020 Civil, de la apelación de medida prejudicial precautoria:

Visto:

Primero: Que en autos sustanciados ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol 13439-2020, caratulados *“Rivera con Luque”*, sobre juicio ordinario de acciones de nulidad de mandato, nulidad de testamento e indignidad para suceder, por resolución dictada el nueve de septiembre de dos mil veinte, modificada parcialmente por aquella del veintidós de octubre del mismo año, se decretaron, como medidas precautorias prejudiciales, las prohibiciones de celebrar actos y contratos sobre determinados bienes inmuebles y productos bancarios pertenecientes a doña Amalia Luque Sánchez. En contra de dichas resoluciones, la demandada Purificación Luque Sánchez, dedujo recurso de apelación, el cual se tramita bajo el presente Ingreso N° 12561-2020 de esta Corte.

Segundo: Que de los antecedentes que da cuenta y que tuvo en vista el tribunal de primera instancia, al momento de dictar la resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, en la etapa previa al juicio propiamente tal, constituyen indicios graves y suficientes para conceder, como lo hizo, en carácter de medida prejudicial precautoria, la prohibición de celebrar actos y contratos sobre determinados bienes inmuebles y productos bancarios, pertenecientes a doña Amalia Luque Sánchez, por lo que, la resolución aludida deberá ser confirmada, sin perjuicio, de lo que se decida, más adelante, acerca de la sentencia definitiva, que viene en revisión.



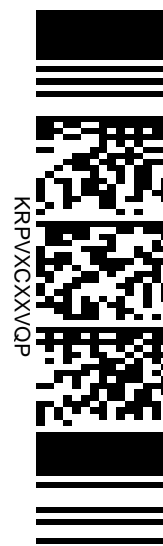
Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ***se confirma***, la resolución dictada el nueve de septiembre de dos mil veinte, por el Primer Juzgado Civil de Santiago, modificada parcialmente por aquella dictada por el mismo tribunal el veintidós de octubre de dos mil veinte, que decretó, como medidas precautorias prejudiciales, la prohibición de celebrar actos y contratos sobre determinados bienes inmuebles y productos bancarios pertenecientes a doña Amalia Luque Sánchez.

II.- En cuanto a la apelación Ingreso Corte N° 9884-2021, de la resolución que denegó la objeción de documentos:

Visto:

Primero: Que por resolución dictada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la misma causa antes referida, el tribunal de primera instancia, rechazó la objeción, formulada por la demandada Purificación Luque Sánchez, al documento acompañado por la actora como “*Informe Médico Amalia Luque Sánchez*”. En contra de esta resolución, la demandada ya aludida, dedujo recurso de apelación, el cual se ingresó bajo el N° 9884-2021, acumulándose, posteriormente, al N° 12561-2020.

Segundo: Que la objeción de documentos, constituye, en el ámbito procesal civil, la vía incidental, para excluir a priori de valoración un determinado instrumento, es decir, supone anticiparse a la ponderación del juez sobre el medio de prueba y, con fundamento estricto en alguna de las causas legales, impedir, cualquier análisis sobre su mérito probatorio. En tal sentido, son causas de objeción la

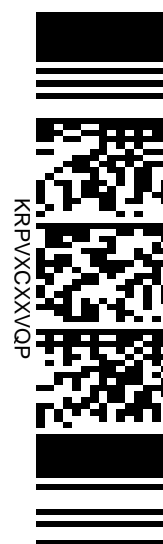


inexactitud y la falsedad para los instrumentos públicos –artículos 17 y 342 del Código de Procedimiento Civil-, y la falsedad y la falta de integridad, para los documentos privados –artículo 346 N° 3 del mismo cuerpo legal-.

Tercero: Que la objeción de documentos que la demandada Purificación Luque Sánchez, deduce, en contra del documento acompañado por la actora como *“Informe Médico Amalia Luque Sánchez”*, se sustenta, en que éste aparece suscrito por María Isabel Behrens Pellegrino, tercera ajena al juicio, quien no concurrió en estrados a reconocer dicho instrumento como testigo, por lo que, de acuerdo a las reglas del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, no se le puede tener por válidamente reconocido.

Cuarto: Que el fundamento descrito precedentemente, no se enmarca dentro de algunas de las hipótesis previstas al efecto, por el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil –falsedad o falta de integridad-, apuntando, en cambio, al valor probatorio que cabe asignar al instrumento en cuestión, lo cual, corresponde efectuar únicamente con ocasión de la sentencia que dirima la controversia, tal como se resolvió por el tribunal de primera instancia, por lo que, la apelación en este punto será igualmente desestimada.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ***se confirma***, la resolución dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago el catorce de octubre de dos mil veintiuno, que rechazó la objeción de documento formulada por la demandada Purificación Luque Sánchez.



III.- En cuanto al Ingreso Corte N° 5030-2022, apelación de la sentencia definitiva:

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:

1.- con excepción del párrafo cuarto del motivo tercero, párrafos segundo y octavo del considerando vigésimo tercero, y los fundamentos vigésimo quinto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, cuadragésimo primero y cuadragésimo tercero, los que se eliminan; y

2.- se corrige, la enumeración, de los motivos trigésimo noveno al quincuagésimo sexto, en cuanto, aquellos corresponden correlativamente a los fundamentos trigésimo primero al cuadragésimo séptimo.

Y se tiene, en su lugar, y además presente:

Primero: Que el documento acompañado por la parte demandante como *“Informe Médico Amalia Luque Sánchez”*, aparece suscrito por la doctora María Isabel Behrens Pellegrino, tercera ajena al juicio, quien no concurrió a reconocer dicho instrumento como testigo, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1702 y 346 del Código de Procedimiento Civil, carece de mérito legal, tal como reiteradamente lo ha reconocido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (a modo ejemplar en los Roles N° 5880-2008, 105-2009, 55174-2016, 83445-2016 y 30510-2021).

Segundo: Que asentado que el documento aludido precedentemente no detenta las virtudes que exigen los artículos 1702 del Código Civil y 346 del Código de Procedimiento Civil, cabe dilucidar, si el mismo ha de ser o no considerado como un antecedente

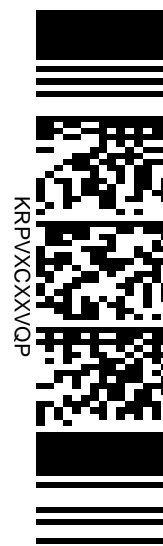


que revista los caracteres de gravedad, precisión y concordancia para configurar una presunción con valor de plena prueba, con arreglo a los artículos 1712 y 426 de los cuerpos normativos antes mencionados, respectivamente.

Para tales efectos, valga señalar que, la probanza en cuestión consiste en un informe que aparece elaborado por doña María Isabel Behrens Pellegrino, quien, expresa, detentar la calidad de médico neurólogo de la Clínica Alemana de Santiago, y que en tal condición, el día 30 de noviembre de 2019, evaluó a doña Amalia Luque Sánchez, a esa fecha, de noventa y cinco años de edad, pudiendo constatar que ésta obtuvo un puntaje de 7 sobre 30 puntos, en la prueba cognitiva *Moca*, el cual era compatible con un cuadro de demencia en la paciente.

La misma probanza, en su segundo párrafo, consigna que los síntomas cognitivos de Amalia Luque Sánchez, le fueron referidos a María Isabel Behrens Pellegrino por la hermana y cuñado de la primera, siendo diferente la velocidad de progresión del deterioro cognitivo en cada paciente, por lo que, la data de inicio es difícil de determinar retrospectivamente, si no es por el informe de terceros.

El tercer y último párrafo del informe que se viene reseñando, sostiene, que hay muchos elementos que pueden influir en el rendimiento cognitivo de un paciente y, que un puntaje *Moca* de 7 puntos, haría plantear una demencia de más de siete años, salvo que el paciente estuviera afectado por algún interferente (infección urinaria o efecto de medicamentos), lo que no constaba al momento de la evaluación de Amalia Luque Sánchez, el 30 de noviembre de 2019.

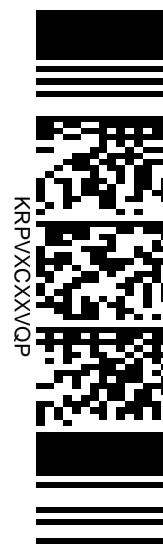


Tercero: Que, como ya se ha anunciado, el instrumento anteriormente pormenorizado, es de carácter privado y no ha sido reconocido en juicio por el tercero que lo emite, quien, en todo caso, correspondería a una profesional requerida por la propia parte demandante, para emitir una opinión técnica sin recurrir ni, a lo menos, respaldarse en la diligencia probatoria idónea al efecto, esto es, a través de un informe pericial decretado en la causa.

Asimismo, tal como advierte el juez *a quo*, el diagnóstico reseñado por la probanza en cuestión, proviene de una única entrevista realizada a la señora Amalia Luque Sánchez, en el año 2019, debiendo apuntarse, además, que tal dictamen consta solamente de los tres párrafos que fueron reseñados en el motivo precedente, en los que se anota que la data del supuesto deterioro cognitivo de la paciente era difícil de determinar retrospectivamente, sin el informe de terceros.

Las circunstancias antes descritas, denotan tanto falta de objetividad como de acuciosidad en las conclusiones, que mediante la probanza analizada se pretende ilustrar al juzgador, para que éste las haga suyas al momento de dirimir la controversia.

De igual manera, es menester, precisar, que el diagnóstico suscrito por María Isabel Behrens Pellegrino, cuya erudición tampoco se ha acreditado en el presente juicio, no se encuentra en concordancia con otras probanzas válidamente aportadas en el juicio -sentencias dictadas por el Centro de Medidas Cautelares de Santiago y testimoniales aportadas por la demandada Purificación Luque Sánchez, además de la absolución de posiciones que esta misma parte provocó respecto a la demandante María Francisca Salazar Luque-, con la sola excepción de la pericia elaborada por el neurólogo Carlos



Silva Rosas, quien, sin embargo, deriva sus conclusiones precisamente del primer diagnóstico aludido.

Por consiguiente, el documento acompañado por la parte demandante, como “*Informe Médico Amalia Luque Sánchez*”, suscrito por María Isabel Behrens Pellegrino, carece de todo valor, bajo las reglas de tasación que imperan en el ámbito civil, al no haber sido reconocido de forma legal en el juicio, según lo dispuesto por los artículos 1702 del Código Civil y 346 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, y tampoco reúne las características de gravedad, precisión y concordancia que exigen los artículos 1712 y 426 de los mismos cuerpos legales antes citados, respectivamente, para constituir una presunción judicial con valor de plena prueba.

Cuarto: Que por las mismas razones desarrolladas en los tres motivos que anteceden, cabe restar todo mérito legal a los documentos acompañados por la parte demandante como “*Informe de María Teresa Astudillo Vallejos, asistente social del Departamento del Adulto Mayor de la Municipalidad de Las Condes*” en primera instancia, y como “*Informe Médico Privado Walter Avdaloff Valencia*”, ante esta Corte, en tanto, las probanzas en cuestión, no han sido reconocidas en el juicio por los terceros que las suscriben y, no revisten tampoco la gravedad, precisión y concordancia, para constituir una presunción judicial con valor de plena prueba.

Quinto: Que las observaciones contenidas en los considerandos cuadragésimo quinto a cuadragésimo séptimo del fallo en alzada, mediante las cuales se resta mérito probatorio al peritaje elaborado por el neurólogo don Carlos Silva Rosas, se ajustan al estándar de la sana crítica, previsto en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil,

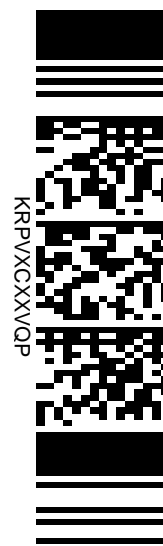


pudiendo agregarse, a mayor abundamiento, que tal pericia no recayó en forma directa sobre la persona de la señora Amalia Sánchez Luque, en lo que se refiere al estado de sus facultades mentales, al momento de haber suscrito ésta, en el año 2016, ni en los actos jurídicos impugnados por la parte demandante, sino que, sobre antecedentes clínicos de la señora Sánchez Luque, derivando sus conclusiones principalmente del informe que aparece suscrito por doña María Isabel Behrens Pellegrino, el cual, como ya se ha establecido, carece de todo mérito legal en el presente juicio, de modo tal, que la misma suerte debe correr este peritaje efectuado por el Dr. Silva.

Sexto: Que en el orden privado, la capacidad es la regla general, según dispone el artículo 1446 del Código Civil, preceptuando el inciso segundo del artículo 465 el mismo cuerpo legal, que los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos, a menos, de probarse que el que los ejecutó o celebró, estaba entonces demente.

Así las cosas, no habiendo aportado la parte demandante, según viene razonado en este fallo y en el de primera instancia, prueba que resultara idónea para acreditar, en forma legal que Amalia Sánchez Luque, se encontraba impedida de manifestar su voluntad, por la incapacidad total de demencia, al momento de celebrar el mandato y el testamento cuya invalidez constituye el objeto del presente juicio, las acciones incoadas en este sentido no podrán prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma**, la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil veintidós, por el Primer Juzgado Civil de Santiago, que rechazó, sin



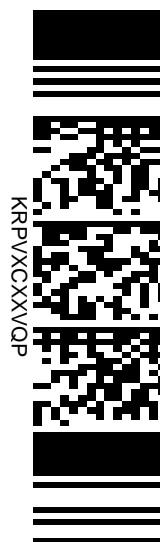
costas, las demandas de nulidad de mandato, nulidad de testamento e indignidad para suceder, interpuestas por doña María Francisca Salazar Luque, Bernardita Adriana Gema Luque Guitart, Paula Rivera Luque, y Sergio Arturo Trautmann Luque, en contra de Purificación Luque Sánchez y María Isabel Salazar Luque.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la Ministro señora Duran Madina.

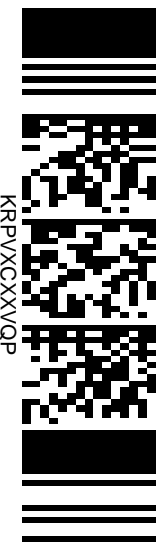
Ingreso Corte N° 12561–2020 Civil (acumulados N° 9884-2021 y 5030-2022).

Pronunciada por la **Primera Sala** de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya, e integrada por la Ministro señora Inelie Duran Madina, y Abogado Integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M., Inelie Duran M. y Abogado Integrante Jose Ramon Gutierrez S. Santiago, cinco de diciembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.